



Asamblea General

Distr. general
30 de enero de 2020
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 86º período de sesiones, 18 a 22 de noviembre de 2019

Opinión núm. 58/2019, relativa a John Wesley Downs (Qatar)

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.
2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió el 9 de agosto de 2019 al Gobierno de Qatar una comunicación relativa a John Wesley Downs. El Gobierno respondió a la comunicación el 8 de octubre de 2019. El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:
 - a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);
 - b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);
 - c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);
 - d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);
 - e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole,



género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

4. John Wesley Downs, nacido en 1955 y ciudadano de los Estados Unidos de América, reside normalmente en Eureka Springs, Arkansas. Según la fuente, el Sr. Downs es un geofísico que se ha convertido en uno de los más renombrados expertos de la empresa Qatar Petroleum. En concreto, sus conocimientos específicos sobre la geología del fondo marino qatarí condujeron a descubrimientos que reportaron cuantiosos ingresos al país.

5. La fuente expone que en 2005 el Sr. Downs quiso explorar nuevas oportunidades profesionales. En un principio solicitó cambiar de departamento en Qatar Petroleum, pero su supervisor denegó la petición argumentando que era demasiado valioso, lo que al parecer también significaba que le pondrían trabas si intentaba buscar nuevas oportunidades fuera de la empresa. Esta situación, junto con la creciente presión financiera que suponía pagar los estudios universitarios de sus hijos, le hizo sentirse atrapado.

6. Según la fuente, era difícil que el Sr. Downs consiguiese otro empleo en Qatar, ya que nadie le contrataría sin el permiso de Qatar Petroleum. Así pues, comenzó a buscar oportunidades fuera del país y finalmente fue entrevistado por la empresa nacional de gas y petróleo de la Arabia Saudita. Notificó su partida con casi seis semanas de antelación a Qatar Petroleum, que le informó de que no recibiría la bonificación esperada. Esta decisión fue un golpe inesperado para su ya complicada situación económica.

7. Ante el desconcierto al que se enfrentaba en su vida profesional y la presión económica y el estrés que sufría en su vida personal, el 5 de junio de 2005 el Sr. Downs envió una carta a la Embajada de la República Islámica del Irán en Qatar. Se presentó como ingeniero de una empresa qatarí con acceso a información sobre reservas de petróleo y gas. Incluyó además un disquete con algunos datos en formato de texto, que demostraba su acceso a la información. La fuente señala que tal información carecía de valor económico tanto para la República Islámica del Irán como para Qatar, pues era relativa a la geología del suelo oceánico a unos 300 m de profundidad y el petróleo y el gas se encuentran mucho más profundos. El Sr. Downs depositó la carta en un buzón de la calle.

8. La fuente aclara que el Sr. Downs nunca trabajó como agente iraní ni estadounidense. No había tenido contacto previo alguno con la República Islámica del Irán, no la había visitado ni había hablado con nadie que trabajase en su nombre. La República Islámica del Irán no le había contactado. No existen pruebas de que tuviese relación alguna con las agencias de inteligencia iraníes ni estadounidenses. Se trataba de un empleado de una empresa qatarí que atravesaba una crisis financiera.

9. La fuente sostiene que los servicios de seguridad qataríes interceptaron la carta el día que se envió, pero se aseguraron de que llegase a la Embajada de la República Islámica del Irán. Esta informó a las autoridades qataríes poco después de recibirla.

10. Según la fuente, el 19 de julio de 2005 los servicios de seguridad qataríes enviaron un correo electrónico al Sr. Downs haciéndose pasar por autoridades iraníes y manifestando su interés por la negociación propuesta. Unos días más tarde, el Sr. Downs respondió con una pregunta de prueba sobre los requisitos técnicos de los datos solicitados, pero no obtuvo respuesta alguna. La semana siguiente volvió a escribirles, de nuevo sin contestación. El 26 de agosto de 2005 recibió un correo electrónico indicándole que se dirigiera a un lugar concreto donde encontraría 1.000 dólares de los Estados Unidos y al que debía llevar toda la información laboral de la que dispusiese. Aunque no esperaba que el plan llegase tan lejos y, por lo tanto, no había preparado la información que se había ofrecido a vender, el Sr. Downs quería darle los 1.000 dólares a su hijo, que empezaba la universidad, para que comprase libros.

11. La fuente expone que el 26 de agosto de 2005 el Sr. Downs se dirigió en coche al lugar indicado sin llevar nada consigo, tomó el dinero y fue detenido al momento. Los servicios de seguridad qataríes lo detuvieron sin orden judicial y sin informarle sobre los

cargos que pesaban sobre él, en contravención del artículo 9, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

12. Asimismo, la fuente afirma que los servicios de seguridad qataríes registraron al Sr. Downs y el vehículo sin encontrar nada y continuaron el registro en su casa. Los agentes parecían estar seguros de que el Sr. Downs era un espía extranjero por lo que, casi indiscriminadamente, confiscaron las cintas de datos, los disquetes, los discos de música y los mapas que había utilizado para guiar a los Boy Scouts en sus excursiones.

13. La fuente añade que entonces fue interrogado por las autoridades. Según se informa, durante el interrogatorio los servicios de seguridad qataríes retuvieron los pasaportes de los familiares del Sr. Downs, pese a no haber sido acusados de participar en el plan, lo que constituye una vulneración del artículo 11, párrafo 2, de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

14. Según la fuente, el Sr. Downs era consciente de que su familia estaría atrapada en Qatar, se quedaría sin hogar y carecería de ingresos si él no hacía una confesión completa. Solicitó hablar con un abogado, pero su petición fue denegada. Confesó haber trazado el plan ante los fiscales y el juez.

15. La fuente expone que el Sr. Downs pasó los dos años posteriores al interrogatorio y a la confesión en régimen de aislamiento a temporadas, hasta que el primer juicio concluyó en abril de 2007. La reclusión prolongada en régimen de aislamiento, que empezó antes de que se le declarase culpable, supuso una vulneración de los artículos 7 y 10, párrafo 2, del Pacto.

16. La fuente observa que en ningún momento se debatió dejarle en libertad bajo fianza, lo que contraviene el artículo 9, párrafo 3, del Pacto. Además, el Sr. Downs no tuvo oportunidad de impugnar su detención ni las condiciones de esta durante los meses que permaneció en régimen de aislamiento a la espera del juicio, lo que vulnera el artículo 9, párrafo 4, del Pacto.

17. La fuente sostiene que la investigación llevada a cabo por los servicios de seguridad qataríes consistió en recopilar material del domicilio y de la oficina del Sr. Downs y en solicitar a Qatar Petroleum que determinase si se trataba de información confidencial. Los empleados subieron el material a sus ordenadores, describieron el contenido y confirmaron que la empresa consideraba la información como confidencial.

18. La fuente informa de que, en el juicio, la fiscalía procedió como si el Sr. Downs hubiese participado en una amplia estrategia de espionaje y se le hubiera descubierto revelando secretos de Qatar a la República Islámica del Irán por valor de grandes sumas de dinero. Las pruebas presentadas en su contra consistían principalmente en las cintas sustraídas de su domicilio y de su oficina en Qatar Petroleum por los servicios de seguridad qataríes. En muchos casos, estas fueron presentadas en el juicio sin especificar su origen.

19. La fuente observa que varios trabajadores de Qatar Petroleum testificaron que la mayor parte de la información se consideraba confidencial. También declararon, sin mayor investigación, que parte de la información pertenecía a un departamento concreto de la empresa y que el Sr. Downs, como empleado de otro, no podía acceder a dicha información sin una autorización por escrito.

20. Según la fuente, el Sr. Downs, que no hablaba árabe, y su familia tuvieron dificultades para entender los cargos y las pruebas en su contra, a lo que se añadió que solo él estuviera presente en la mayor parte del juicio, al que ni la familia ni los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos tuvieron acceso. De hecho, estos últimos fueron expulsados de la sala del tribunal por agentes de la policía qatarí. Además, presuntamente, las autoridades impidieron que el primer abogado elegido por el Sr. Downs viese determinadas pruebas y asistiera al juicio. La familia del Sr. Downs contrató numerosos abogados durante todo el proceso, tanto en Qatar como en los Estados Unidos, pero ninguno pudo averiguar completamente lo que ocurría en el juicio, celebrado a puerta cerrada. El Sr. Downs no dispuso de intérprete durante gran parte del proceso. A fecha del presente documento, pese a las numerosas gestiones realizadas, no se ha permitido al Sr. Downs ni a su familia ver las actas del tribunal referidas a su caso.

21. El Sr. Downs fue condenado por haber vulnerado los artículos 107, 110 y 371 del Código Penal de Qatar y con arreglo al artículo 107, que establece que “se impondrá pena capital o de prisión perpetua a cualquiera que intente trabajar para otro país o a cualquier agente que trabaje para este o contacte a cualquiera de ellos de forma que perjudique la situación bélica, política o económica del Estado”. El Sr. Downs fue condenado a prisión perpetua. Se permitió que observadores de la Embajada de los Estados Unidos presenciasen la audiencia de imposición de la pena.

22. Tanto el Sr. Downs como el Gobierno de Qatar interpusieron recursos. El del primero estaba fundado en las irregularidades procesales y en el argumento de que su conducta no había vulnerado el artículo 107 del Código Penal. En el suyo, el Gobierno solicitaba la ejecución del Sr. Downs. Ambos recursos fueron desestimados.

23. Según la fuente, se impuso al Sr. Downs una pena de prisión perpetua seguida de expulsión. Más tarde, la familia descubrió que en Qatar la pena de prisión perpetua equivale a la cadena perpetua, lo que se traduce en 25 años de encarcelamiento, y que los presos qataríes suelen cumplir la mitad de la condena antes de que se les ponga en libertad mediante una conmutación o un edicto similar del Emir. También se le informó de que los delincuentes no violentos y los fundamentalmente políticos como el Sr. Downs suelen cumplir menos tiempo. La fuente observa que esto está en consonancia con los numerosos indultos y conmutaciones concedidos durante los años siguientes a la condena del Sr. Downs.

24. Sus familiares solicitaron un indulto a finales de 2017, cuando el Sr. Downs llevaba 12 años y medio en prisión, exactamente la mitad del plazo de 25 años. No tuvieron noticias de la solicitud, así que asumieron que había sido denegada. El Sr. Downs y su familia cambiaron de representación letrada tras la decisión del Emir de no indultarle. Los continuos intentos de la familia hicieron que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar enviara a la Embajada de los Estados Unidos una denegación oficial de la solicitud de indulto, en la que el Ministerio se refirió a la legislación sobre la libertad condicional y afirmó por primera vez que el Sr. Downs no podría optar a un indulto hasta agosto de 2025, momento en el que ya habría cumplido 20 años en prisión.

25. La fuente afirma que, si bien el Sr. Downs infringió la legislación qatarí, la gravedad del hecho culposo se tergiversó con fines políticos. La suposición de que se trataba de un agente extranjero implicado en una labor de espionaje de miles de millones de dólares contra Qatar impregnó la investigación y más tarde el procesamiento. Así, se daba por sentado que el Sr. Downs tenía la intención de proporcionar información confidencial a la República Islámica del Irán, que se habían encontrado datos confidenciales sobre Qatar Petroleum en su domicilio y en su lugar de trabajo y que, por consiguiente, los había conseguido de forma ilícita con el propósito de facilitárselos a la República Islámica del Irán. La fuente afirma que la existencia de la mayoría de las cintas confidenciales solo demostraba que el Sr. Downs hacía su trabajo, el cual le requería disponer de información confidencial, y reitera que el Sr. Downs no actuaba en nombre de una agencia de inteligencia.

26. La fuente especifica que, aunque el tribunal y los servicios de seguridad qataríes trataron las cintas como pruebas del delito, fue Qatar Petroleum quien había indicado al Sr. Downs que hiciera la mayoría de ellas, a modo de copias de seguridad, tras enterarse de sus planes de dejar la empresa. Sin embargo, en el proceso, sin pruebas, parecía que el Sr. Downs hubiera preparado las cintas en secreto, sin autorización alguna y con la intención de vendérselas a la República Islámica del Irán. Además, la mayoría de las pocas pruebas que podrían haber interesado realmente a la República Islámica del Irán se habían generado con la autorización de Qatar Petroleum y en pro de sus objetivos. A esto se suma que el Sr. Downs nunca trató de transferir la información de las cintas a los disquetes que las autoridades iraníes podrían haber leído en un ordenador. La fuente añade que esos argumentos ejemplifican las abrumadoras dificultades logísticas, entre otras, a las que se enfrentaron el Sr. Downs y su equipo de abogados durante el procedimiento.

27. La fuente reitera que no se permitió al primer abogado del Sr. Downs asistir al juicio por ser un árabe no qatarí y por el presunto carácter sensible de las pruebas, lo que supuso una vulneración del artículo 14, párrafo 1, del Pacto. Además, el Sr. Downs permaneció en

régimen de aislamiento durante el procedimiento, con solo algunas oportunidades breves para consultar a su abogado antes y después de comparecer, en contravención del artículo 14, párrafo 3 b), del Pacto. Al principio, ni su familia ni los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos tenían permitido presenciar el juicio. El abogado asignado posteriormente, quien solicitó 200.000 dólares de los Estados Unidos en concepto de honorarios, no permitió a su cliente, el Sr. Downs, acceder al expediente del caso, alegando que, según Qatar, contenía información de carácter sensible que no podía compartirse. Por consiguiente, la fuente sostiene que todo el procedimiento fue injusto y que el papel del Sr. Downs se redujo al de observador.

28. La fuente afirma que no se debería haber condenado al Sr. Downs en virtud del artículo 107 del Código Penal y que las posibles sanciones por vulnerar dicho artículo (pena de muerte o de prisión perpetua) son extremas, lo que hace difícil imaginar que estuvieran destinadas a aplicarse a actos que no dañasen el interés nacional de Qatar.

29. Además, sostiene que tal interpretación no es razonable al leer el artículo 107 en contexto con otras normas conexas. En concreto, en otros artículos se menciona aceptar dinero de una potencia extranjera y descubrir secretos estatales con la intención de revelarlos, pero ninguno de estos delitos se castiga con la pena de muerte ni con la de prisión perpetua. Por otra parte, el artículo 110 del Código Penal, en virtud del que también se condenó al Sr. Downs, impone condenas de hasta 15 años de prisión por obtener secretos estatales con la intención de revelarlos a un Estado extranjero. El artículo 120 del Código Penal, con arreglo al cual no se le condenó, impone una pena máxima de 10 años por aceptar dinero de una potencia extranjera y hacer promesas “con la intención de cometer un acto en perjuicio de los intereses nacionales”. La fuente concluye que el artículo 107 y las penas mucho más graves que recoge, leído en contexto con estos otros, requiere pruebas de los daños reales sufridos por Qatar en lugar de pruebas de simplemente haberse involucrado en un plan o intento que podría causar tales daños.

30. En su recurso, el Sr. Downs argumentó algo similar, al afirmar que, como Qatar no había sufrido daños reales, solo se le debería condenar por intentar vulnerar el artículo 107. En aplicación del artículo 29 del Código Penal, esto habría reducido su condena a 15 años como máximo. No obstante, el tribunal de apelación rechazó ese argumento al objetar que el *actus reus* había consistido en espiar para un Estado extranjero o para una persona a su servicio, siempre en perjuicio de la posición militar, política o económica del Estado, que no era necesario que se sufriesen los daños, que bastaba con que la tarea o el espionaje surtiera tal efecto, y que tal delito no se pudiera cometer. La fuente expone que dicha interpretación no se puede ajustar a los artículos 110 y 120 del Código Penal sin que estos resulten superfluos. La interpretación de intentar participar en actos que, de tener éxito, perjudicarían a Qatar tampoco se puede conciliar fácilmente con una presunta pena de prisión permanente o de muerte. Además, el Sr. Downs no vulneró el artículo 107 ni siquiera con arreglo a una interpretación del Código Penal.

31. La fuente aduce que el artículo 120 prohíbe espiar y actuar de concierto con un Estado extranjero, pero que en el presente caso tal delito no se cometió y no existen pruebas de lo contrario. Asimismo, la información que el Sr. Downs había ofrecido enviar a la República Islámica del Irán carecía de valor para esta. Además, los servicios de seguridad qataríes interceptaron la carta y no se la habrían hecho llegar junto con el disquete a los iraníes si hubieran considerado que eso iría en detrimento de los intereses de Qatar.

32. La fuente afirma que el juicio y la severa condena del Sr. Downs son ejemplos de las deficiencias y arbitrariedades en el respeto de las debidas garantías procesales. Observa también que este no es el primer ciudadano de los Estados Unidos que se ha enfrentado a las actuaciones penales qataríes y a la cadena perpetua.

33. La fuente añade que la denegación de la solicitud de indulto que había presentado el Sr. Downs, citada a continuación, está redactada de forma confusa y es incompatible con la legislación qatarí, ya que implica erróneamente que el Sr. Downs debe cumplir al menos 20 años de condena para poder optar a un indulto:

El Ministerio desea informar a la Embajada de que las autoridades competentes de Qatar indicaron que el Sr. Downs cumple una condena de prisión perpetua por cargos de espionaje. Respecto a la solicitud de indulto por motivos

humanitarios, el indulto forma parte de la autoridad constitucional del Emir y no es un derecho del condenado, que puede optar a un indulto el 26 de agosto de 2025 tras cumplir 20 años de condena de conformidad con el artículo 67 de la Ley núm. 3 de 2009 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y Correccionales (si la pena es de prisión perpetua, no está permitido poner en libertad al acusado hasta pasados 20 años como mínimo).

34. La fuente observa que el uso de la palabra “espionaje” confirma que las autoridades justifican la condena del Sr. Downs y su encarcelamiento continuado desde la premisa de que trabajaba para un Gobierno extranjero. Reitera que se condenó al Sr. Downs bajo una disposición que no se correspondía con su verdadera conducta, puesto que no trabajaba para ningún Estado extranjero ni como espía. El Estado extranjero en cuestión no le había contactado, no había tratado con ningún miembro de este ni recibido remuneración alguna de su parte. Sin embargo, fue declarado culpable y condenado como si fuera un espía extranjero que hubiese causado un perjuicio considerable a Qatar.

35. La fuente sostiene que existió confusión en torno a cuándo podría el Sr. Downs optar a ser puesto en libertad, si no era mediante el indulto del Emir. Por primera vez el Gobierno le informó de que, según la legislación de Qatar, no tendrá derecho a ser indultado hasta que haya cumplido 20 años de condena.

36. La fuente expone que la disposición a la que se refieren ahora las autoridades entró en vigor años después de que el Sr. Downs fuese declarado culpable y que no se debería permitir prolongar su pena de prisión. Además, afirma que el mensaje antes mencionado implica erróneamente que la disposición prohíbe que el Emir lo indulte hasta haber cumplido 20 años de condena. La disposición mencionada por el Gobierno de Qatar se refiere a las directrices que regulan la puesta en libertad en términos equivalentes a lo conocido como libertad condicional. La fuente alega que tales directrices no guardan relación con las solicitudes de indulto dirigidas al Emir. De hecho, la legislación confirma que el Emir mantiene la potestad de indultar a cualquier persona (véase el artículo 73 de la Ley de Regulación de las Instituciones Penitenciarias y Correccionales (Ley núm. 3 de 2009)). En la última década, el Emir ha ejercido reiteradamente su facultad de indulto.

37. La fuente llega a la conclusión de que, pese a que la legislación nacional de Qatar autoriza la privación de libertad del Sr. Downs, bajo ninguna interpretación razonable del Código Penal se le habría condenado a prisión perpetua.

38. La fuente expone que Qatar ha infringido el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos al impedir que la familia del Sr. Downs abandonase el país hasta que este hiciera una confesión completa y aduce que las autoridades han violado el artículo 9 de la Declaración al detenerlo sin orden judicial, mantenerlo recluido antes de que se le declarase culpable de un delito y continuar su reclusión por una aplicación arbitraria de la legislación nacional.

39. La fuente sostiene asimismo que las autoridades han vulnerado el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos al denegarle una audiencia pública y con las debidas garantías. El juicio no fue público e incluso se prohibió a su primer abogado estar presente en el proceso. Tampoco fue justo, ya que no se permitió al Sr. Downs contar con pruebas de descargo ni con testigos imparciales ni estudiar las pruebas en su contra con ayuda de un abogado antes del juicio.

40. Además, la fuente sostiene que las autoridades vulneraron el artículo 9 del Pacto al detener arbitrariamente al Sr. Downs e imponerle una sentencia desproporcionada por el delito cometido, detenerle sin orden judicial, no considerar la posibilidad de dejarlo en libertad condicional en espera de juicio, recluirlo en régimen de aislamiento durante períodos prolongados y negarle la oportunidad de impugnar su detención.

41. La fuente afirma que las autoridades vulneraron el artículo 14 del Pacto al no proporcionarle una audiencia pública, no respetar la presunción de inocencia, impedirle elegir abogado, privarle de los recursos para preparar la defensa de los cargos formulados en su contra, no juzgarle a tiempo y negarle la oportunidad de interrogar eficazmente a los testigos de la acusación.

42. La fuente concluye que la detención prolongada del Sr. Downs responde a motivaciones políticas y se cree que se trata del único ciudadano de los Estados Unidos recluso actualmente en la prisión central de Qatar.

43. Por último, la fuente añade que el Sr. Downs necesita tratamiento para unos dolores graves que empezó a padecer en octubre de 2018 o antes y que han empeorado considerablemente en los últimos meses. Pese a sus peticiones y las de sus familiares para que se le dispense tratamiento médico adecuado, el Sr. Downs solo ha recibido tratamiento mínimo e inefectivo. La fuente afirma que el hecho de que las autoridades no traten el problema de salud grave y doloroso del Sr. Downs contraviene el artículo 10 del Pacto.

Respuesta del Gobierno

44. El 9 de agosto de 2019, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno en el marco de su procedimiento ordinario de comunicaciones. Le pidió que, a más tardar el 8 de octubre de 2019, aportara información detallada sobre la situación actual del Sr. Downs y aclarase las disposiciones jurídicas que justificaban que siguiera privado de libertad, así como su compatibilidad con las obligaciones contraídas por Qatar en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y, en particular, de los tratados ratificados por el Estado. Además, el Grupo de Trabajo exhortó al Gobierno de Qatar a garantizar la integridad física y psíquica del Sr. Downs.

45. El 8 de octubre de 2019, el Gobierno de Qatar presentó su respuesta, en la que expuso que la legislación del Estado de Qatar otorgaba numerosas garantías jurídicas a los detenidos, sin discriminación, como demostraban los artículos 40, 42, 43 y 73 del Código del Proceso Penal. En la respuesta, el Gobierno transmite el texto de dichos artículos.

46. Menciona los artículos 107, 110 y 371 del Código Penal, relativos al proceso penal del Sr. Downs.

47. El Gobierno recuerda la cronología del proceso. Según afirma, se detuvo al Sr. Downs el 26 de agosto de 2006 por el cargo de espionaje. La información de la este que disponía era confidencial y no podía distribuirse debido a las repercusiones negativas que ocasionaría en los intereses de seguridad, políticos y económicos del Estado. El 28 de agosto de 2006 se le puso a disposición de la fiscalía.

48. El Gobierno expone que el 8 de febrero de 2007 el Sr. Downs fue condenado en primera instancia a prisión perpetua, a ser expulsado del país tras el cumplimiento de la pena y a la confiscación de todos los artículos incautados. El 24 de junio de 2007 se le remitió a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y Correccionales para cumplir la condena.

49. Asimismo, el Gobierno alega que el 25 de noviembre de 2007 el Tribunal de Apelaciones dictó una sentencia en la que aceptó el recuso en términos procesales, lo rechazó en cuanto al fondo y ratificó la sentencia que se había recurrido (la prisión permanente). Como el Sr. Downs no interpuso un recurso ante el Tribunal de Casación, la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones fue definitiva y se agotaron todas las instancias procesales.

50. El Gobierno resalta que el Sr. Downs recibió la atención médica integral gratuita que prestan las instituciones penales y correccionales a todos los reclusos. La atención médica especializada se presta a cargo del Estado.

51. Además, el Gobierno observa que se permite al Sr. Downs recibir todo tipo de visitas. Cuando sus familiares extranjeros van a Qatar, se les permite hacerle visitas largas. También le van a ver periódicamente funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos. Asimismo, tiene permiso para llamar por teléfono, si así lo solicita, al personal de la Embajada, a su abogado y a su familia.

52. Por lo tanto, el Gobierno concluye que no se ha sometido al Sr. Downs a ningún procedimiento que pudiera considerarse como un supuesto de detención arbitraria. Por el contrario, las autoridades competentes han cumplido las leyes en vigor actualmente en el Estado y han actuado de conformidad con los instrumentos internacionales ratificados por Qatar.

53. El Gobierno añade que siempre tiene en cuenta las obligaciones impuestas por los tratados y las normas internacionales de derechos humanos y que trata de cumplirlas con la debida transparencia, ya que cree firmemente que las cuestiones de derechos humanos son la piedra angular de las políticas de reforma integral emprendidas por el Estado.

54. La respuesta del Gobierno se envió el 9 de octubre de 2019 a la fuente para que formulara comentarios adicionales, que fueron remitidos el 18 de octubre de 2019.

Comentarios adicionales de la fuente

55. La fuente reitera que Qatar vulneró 12 artículos del Pacto al detener, recluir, juzgar y condenar al Sr. Downs. En su respuesta, el Gobierno no niega ni justifica tales vulneraciones, entre otras, que el Sr. Downs permaneciera recluso en régimen de aislamiento durante meses hasta su condena, que no contase con un juicio justo y público, que se interfiriese en su derecho a recibir asistencia letrada y que no se le dispensara atención médica, pese a lo declarado por el Gobierno.

56. La fuente insiste en que el Sr. Downs fue condenado y sentenciado injustamente y que el Gobierno, en su respuesta, no ha justificado la condena impuesta con arreglo al artículo 107 del Código Penal ni explicado cómo su presunta conducta perjudicó a Qatar.

57. Afirma también que la detención del Sr. Downs fue arbitraria y constituye una vulneración de los tratados internacionales y de la legislación qatarí y que se le debe poner inmediatamente en libertad.

Deliberaciones

58. El Grupo de Trabajo agradece a la fuente y al Gobierno la información recibida y aprecia la cooperación y el compromiso de ambas partes en esta cuestión. La fuente ha afirmado que la detención del Sr. Downs es arbitraria sin mencionar ninguna de las categorías empleadas por el Grupo de Trabajo. El Gobierno niega que la detención del Sr. Downs sea arbitraria.

59. Como cuestión preliminar, el Grupo de Trabajo observa que Qatar se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el 21 de mayo de 2018 y que el Gobierno no planteó la objeción *ratione temporis* a la fuente, alegando que las vulneraciones del Pacto en el presente caso, que ocurrieron tras la detención, el procesamiento y la reclusión del Sr. Downs, tuvieron lugar antes de dicha fecha. Por lo tanto, concluye que no se pueden invocar las disposiciones del Pacto al examinar los hechos ocurridos antes del 21 de mayo de 2018, cuando dicho instrumento pasó a ser vinculante para Qatar.

60. Al emitir la presente opinión, el Grupo de Trabajo recalca que su mandato no comprende el examen de los eventuales delitos cometidos por el Sr. Downs y que lo único que debe considerar es si la detención fue conforme con las normas internacionales de los derechos humanos.

61. El Grupo de Trabajo observa el argumento de la fuente según el cual el Sr. Downs fue detenido sin orden judicial el 26 de agosto de 2005, en contravención del artículo 9 del Pacto. En principio, una detención sin orden judicial constituye una vulneración de los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Como ya ha señalado el Grupo de Trabajo, para que la privación de libertad tenga fundamento jurídico no basta con que exista una ley que autorice la detención. Las autoridades deben invocar ese fundamento jurídico y aplicarlo a las circunstancias del caso mediante una orden de detención¹.

62. Sin embargo, según lo reconocido por la fuente, el Sr. Downs fue detenido al cometer el delito por el que más tarde se le condenó. Independientemente de si sus acciones constituían un delito, el Grupo de Trabajo acepta que, al detenerle *in situ*, mientras cometía el delito, las autoridades qataríes actuaron de buena fe asumiendo que se estaba perpetrando un delito y, por lo tanto, el Sr. Downs fue detenido en flagrante delito, lo que es compatible con las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

¹ Véanse las opiniones núms. 75/2017, 66/2017 y 46/2017.

63. El Grupo de Trabajo observa que se llevaron a cabo varios registros en el domicilio y en la oficina del Sr. Downs tras su detención y que la fuente no ha denunciado que se practicaran sin que mediase una orden judicial. Por lo tanto, el Grupo de Trabajo asume que los registros fueron legales.

64. Además, si bien el Grupo de Trabajo considera que está facultado para evaluar las actuaciones del tribunal y la propia ley para determinar si cumplen las normas internacionales², cuando se le ha pedido que revise la aplicación de la legislación nacional por el poder judicial, se ha abstenido de manera sistemática de sustituir a las autoridades judiciales nacionales o de actuar como una suerte de tribunal supranacional³. Por lo tanto, queda fuera del mandato del Grupo de Trabajo evaluar si los tribunales nacionales clasificaron correctamente determinadas acciones de un acusado en una causa penal de conformidad con las disposiciones jurídicas nacionales o examinar si interpretaron de forma adecuada la legislación. Así, concluir lo contrario requeriría que el Grupo de Trabajo actuase como una suerte de órgano de apelación supranacional que no es. Esta clase de asuntos corresponde al dominio soberano de los más altos tribunales nacionales. Por lo tanto, las alegaciones formuladas por la fuente de que las pruebas presentadas en el juicio del Sr. Downs fueron insuficientes o que no se le debería haber condenado en aplicación del artículo 107 del Código Penal no corresponden al mandato del Grupo de Trabajo.

65. La fuente ha facilitado varias comunicaciones adicionales respecto al procesamiento del Sr. Downs y el Grupo de Trabajo observa que el Gobierno, en su respuesta, no se refirió a ninguna de las alegaciones presentadas. El Grupo de Trabajo ha establecido en su jurisprudencia su manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de los requisitos internacionales constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones. La mera afirmación de este de que se han seguido los procedimientos legales no basta para refutar las presunciones de la fuente (A/HRC/19/57, párr. 68).

66. El Grupo de Trabajo observa el argumento de la fuente según el cual se restringió gravemente el derecho de asistencia letrada del Sr. Downs: se impidió que su primer abogado asistiera a las audiencias del juicio por ser un árabe no qatarí, el procesamiento tuvo lugar bajo un velo de secretismo y el acusado tuvo oportunidades limitadas de tratar con su abogado, ya que se encontraba recluido en régimen de aislamiento. El derecho a una asistencia letrada efectiva e inmediata es la piedra angular de las debidas garantías procesales y un elemento esencial para asegurar el principio de igualdad de medios procesales. Como el Gobierno no ha refutado las alegaciones, el Grupo de Trabajo dictamina que se ha vulnerado el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

67. Asimismo, la fuente expone que se retuvieron los pasaportes de la familia del Sr. Downs tras su detención y que este decidió confesar por miedo a que sus familiares no pudieran abandonar Qatar y a que le denegaran el acceso a un abogado. Se trata de una acusación muy grave a la que el Gobierno ha decidido no responder. El Grupo de Trabajo considera que tales acciones condicionaron de forma indebida al Sr. Downs para confesar el delito por el que le habían detenido y le privaron, por tanto, de un juicio justo, en contravención del artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

68. Además, la fuente sostiene que el Sr. Downs y sus abogados no tuvieron acceso íntegro a las pruebas en su contra, tampoco a pruebas de descargo y a testigos imparciales, ni pudieron estudiar las pruebas en su contra antes del juicio. Como ha afirmado el Grupo de Trabajo, toda persona privada de libertad tiene derecho a acceder al material relacionado con esa privación de libertad o presentado al tribunal por el Estado a fin de preservar la igualdad de medios procesales, incluida la información que pueda ayudar a esa persona a argumentar que la privación de libertad es ilegal o que los motivos de esta ya no existen⁴.

² Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 33/2015 y 15/2017.

³ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 40/2005 y 35/2019.

⁴ Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal (A/HRC/30/37, anexo), principio 12 y directriz 13. Véanse asimismo las opiniones núms. 78/2018,

Sin embargo, este derecho no es absoluto y la divulgación de información puede restringirse si esa restricción es necesaria y proporcionada en la persecución de un objetivo legítimo, como la protección de la seguridad nacional, y si el Estado ha demostrado que con medidas menos restrictivas no se podría lograr el mismo resultado, por ejemplo, con la presentación de resúmenes de información en los que se señale claramente el fundamento de hecho de la detención⁵. No obstante, el Comité observa que en el presente caso el Gobierno no ha comunicado las razones por las que el Sr. Downs y sus abogados no tuvieron acceso íntegro a las pruebas ni pudieron interrogar a los testigos de la acusación. Así pues, el Grupo de Trabajo considera que se han vulnerado los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

69. Se ha mencionado que el juicio tuvo lugar en árabe y que no se pusieron a disposición del Sr. Downs los servicios de traducción o interpretación adecuados, acusación a la que el Gobierno ha decidido no responder. El Grupo de Trabajo recuerda que, de conformidad con el principio 14 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión⁶, la persona que no comprenda o hable adecuadamente el idioma empleado por las autoridades tiene derecho a la asistencia de un intérprete en las actuaciones judiciales. Asimismo, la esencia del concepto de juicio imparcial es que el acusado pueda entender el proceso y, a tal fin, el Estado tiene la obligación de proporcionarle un intérprete de forma gratuita. Ya que esto no fue así en el procesamiento del Sr. Downs, el Grupo de Trabajo considera que se ha vulnerado de nuevo el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

70. La fuente expone que el juicio tuvo lugar a puerta cerrada y que ni la familia del Sr. Downs ni los representantes de la Embajada de los Estados Unidos pudieron asistir a las audiencias. El Gobierno tampoco ha respondido a esta acusación, limitándose a sostener que el Sr. Downs tenía permiso para recibir visitas familiares y de la Embajada tras ser condenado.

71. Respecto a que el juicio se celebrase a puerta cerrada, el Grupo de Trabajo recuerda que, en principio, todo juicio debe ser público y que celebrarlo a puerta cerrada solo es compatible con el derecho internacional en circunstancias excepcionales. En el presente caso, el Gobierno no ha explicado por qué era necesario celebrarlo a puerta cerrada. Por lo tanto, el Grupo de Trabajo considera que se ha vulnerado el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

72. En cuanto a la alegación de que se impidió que los representantes de la Embajada de los Estados Unidos asistieran al juicio, el Grupo de Trabajo observa que no está claro si no se permitía al Sr. Downs recibir asistencia consular y, por lo tanto, no puede evaluar la situación. Sin embargo, quiere recordar que la asistencia consular o la protección consular constituyen una salvaguardia importante para las personas detenidas y encarceladas en un Estado extranjero a fin de garantizar el cumplimiento de las normas internacionales. Reconoce a esas personas, así como a los funcionarios consulares de su nacionalidad, ciertos derechos consulares, entre los que se incluye el derecho a comunicarse libremente con sus nacionales reclusos y a tener acceso a ellos, así como a ser informados sin demora de la detención. Esos derechos se reconocen en la regla 62, párrafo 1, de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela)⁷ y en el principio 16, párrafo 2, del Conjunto de Principios.

73. La fuente ha alegado que se recluyó al Sr. Downs en régimen de aislamiento a temporadas durante los dos años posteriores a su detención, otra acusación a la que el Gobierno ha decidido no responder. No obstante, el Grupo de Trabajo observa que la fuente no menciona fechas, por lo que no queda claro qué significa exactamente “a temporadas”. Al mismo tiempo, recuerda al Gobierno que, de conformidad con la regla 45 de las Reglas Nelson Mandela, la imposición de la reclusión en régimen de aislamiento debe ir

párrs. 78 y 79; 18/2018, párr. 53; 89/2017, párr. 56; 50/2014, párr. 77; y 19/2005, párr. 28 b), en las que el Grupo de Trabajo llegó a una conclusión similar sobre la vulneración del principio de igualdad de medios procesales cuando se oculta información al acusado.

⁵ Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas, directriz 13.

⁶ Resolución 43/173 de la Asamblea General, anexo.

⁷ Resolución 70/175 de la Asamblea General, anexo.

acompañada de ciertas salvaguardias. El régimen de aislamiento solo debe aplicarse en casos excepcionales, como último recurso, durante el menor tiempo posible, con sujeción a una revisión independiente y con el permiso de una autoridad competente. No parece que se hayan respetado esas condiciones en el presente caso. La reclusión prolongada en régimen de aislamiento durante más de 15 días consecutivos está prohibida en virtud de las reglas 43, párrafo 1 b), y 44 de las Reglas Nelson Mandela⁸.

74. Por último, la fuente ha afirmado asimismo que no se concedió la libertad bajo fianza ni se indultó al Sr. Downs a finales de 2017. Estas alegaciones tampoco recibieron respuesta alguna por parte del Gobierno. No obstante, el Grupo de Trabajo observa que la fuente no ha sido específica respecto a las alegaciones sobre la libertad bajo fianza. No queda claro si la audiencia para la libertad bajo fianza tuvo lugar sin éxito o si nunca se celebró. A falta de dicha información, el Grupo de Trabajo no puede realizar una evaluación.

75. En cuanto a la denegación de la libertad condicional para el Sr. Downs a finales de 2017, el Grupo de Trabajo recuerda que la aplicación de la libertad condicional suele ser una facultad discrecional de las autoridades estatales. Por consiguiente, corresponde al Grupo de Trabajo determinar que los procedimientos llevados a cabo durante la consideración de la aplicación de la libertad condicional fueron justos y se llevaron a cabo de manera no discriminatoria. En el presente caso, el Grupo de Trabajo observa que se ofreció una explicación detallada al Sr. Downs sobre por qué se había rechazado la libertad condicional, aunque tarde.

76. Teniendo en cuenta todo lo anterior, y más concretamente que se denegasen al Sr. Downs la debida asistencia letrada, una audiencia justa y pública y el acceso completo a las pruebas, así como que se le condicionase de forma indebida para que confesara, todo lo cual supone violaciones muy graves de las debidas garantías procesales, el Grupo de Trabajo concluye que la detención del Sr. Downs es arbitraria y se inscribe en la categoría III.

77. El Grupo de Trabajo desea expresar su preocupación por el estado de salud del Sr. Downs y exhorta al Gobierno a que le preste la atención médica adecuada de conformidad con las Reglas Nelson Mandela, en especial con las reglas 24, 25, 27 y 30.

Decisión

78. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de John Wesley Downs es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y se inscribe en la categoría III.

79. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Qatar que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Downs sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

80. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, especialmente el período pasado en prisión, el remedio adecuado sería poner al Sr. Downs inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

81. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Downs y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

82. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

⁸ Véanse también las opiniones núms. 83/2018 y 17/2019.

Procedimiento de seguimiento

83. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) Si se ha puesto en libertad al Sr. Downs y, de ser así, en qué fecha;
- b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones al Sr. Downs;
- c) Si se ha investigado la violación de los derechos del Sr. Downs y, de ser así, el resultado de la investigación;
- d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de Qatar con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;
- e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

84. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

85. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

86. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado⁹.

[Aprobada el 18 de noviembre de 2019]

⁹ Resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.